



REVISTA
Casa da
GEOGRAFIA
de Sobral
ISSN 2316-8056

CONTEXTO HISTÓRICO RELACIONAL DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA COMUNA 13 DE MEDELLÍN

Contexto histórico e relacional da organização social na comuna 13 de Medellín

Historical and relational context of social organization in commune 13 of Medellín

 <https://doi.org/10.35701/rcgs.v28.1279>

Andrés Felipe Roso Zapata¹


RESUMEN

El documento presenta parte de los resultados de una tesis doctoral que busca redefinir la comprensión de la relación social, concibiéndola como un elemento a priori y no como un atributo derivado de los actores. Esta inversión propone una ontología en la que la relación social es preconditionada por el espacio-tiempo y el discurso. El abordaje de las acciones humanas desde una perspectiva práctica revela un sentido más profundo que la conciencia individual, el cual se torna necesario de profundizar en el contexto urbano actual en el que el vínculo social es frágil. El lente teórico que posibilita el análisis de la relación social desde su dimensión simbólica, organizacional y pragmática, es el enfoque relacional, a partir del cual se revelan los efectos emergentes del vínculo y su relación con el contexto. El caso de estudio es la Comuna 13 de Medellín, un territorio marcado por la violencia y la resistencia. Allí se analiza cómo la organización social ha nacido y evolucionado en medio del conflicto armado, el arte como re-existencia y los efectos de la política pública del urbanismo social.

Palabras clave: Comuna 13, dinámicas instituidas e instituyentes, enfoque relacional, organización social, vínculo social.

¹ Además de la investigación doctoral, el texto es resultado de las investigaciones: “Planeación local y presupuesto participativo: incidencias socio-políticas en el fortalecimiento democrático-participativo y la construcción de paz territorial en Medellín (Colombia), período 2005-2020”, convocatoria CODI-Programática Área de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, código SIIU 2020-33784 y “Políticas urbanas y prácticas de turismo en barrios populares de Medellín-Colombia y favelas de Rio de Janeiro-Brasil: transformaciones en la apropiación del espacio público”, convocatoria Fondo de Apoyo a la Internacionalización de la investigación- CODI, código SIIU 2019-25372, ambas registradas en el Sistema Universitario de Investigación de la Universidad de Antioquia-Colombia.

Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Antioquia-Colombia. Integrante del grupo de Investigación Medio Ambiente y Sociedad (MASO), línea de investigación en Planeación, Ciudadanía, Territorio y Ambiente (PCTA) y semillero de investigación SIGMAS, adscritos a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia-Colombia. E-mail: andres.roso@udea.edu.co

 <https://orcid.org/0009-0008-2819-9839>



RESUMO

Este documento apresenta alguns dos resultados de uma tese de doutorado que busca redefinir a compreensão das relações sociais, concebendo-as como um elemento a priori, e não como um atributo derivado dos atores. Essa inversão propõe uma ontologia sem substância, na qual as relações sociais são uma condição moldada pelo espaço-tempo e pelo discurso. Abordar as ações humanas a partir de uma perspectiva prática revela um significado mais profundo do que a consciência individual, um significado que precisa ser explorado no contexto urbano atual, onde os laços sociais são frágeis. A lente teórica que possibilita a análise das relações sociais a partir de suas dimensões simbólica, organizacional e pragmática é a abordagem relacional, da qual se revelam os efeitos emergentes desses laços e sua relação com o contexto. O estudo de caso é a Comuna 13 em Medellín, um território marcado pela violência e pela resistência. Ali, a análise examina como a organização social emergiu e evoluiu em meio ao conflito armado, a arte como forma de reexistência e os efeitos das políticas públicas sobre o urbanismo social.

Palavras-chave: Comuna 13, dinâmicas estabelecidas e institucionais, abordagem relacional, organização social, vínculo social.

ABSTRACT

This document presents some of the results of a doctoral thesis that seeks to redefine the understanding of social relations, conceiving them as an a priori element rather than an attribute derived from the actors. This inversion proposes an ontology without substance, in which social relations are a precondition shaped by space-time and discourse. Approaching human actions from a practical perspective reveals a deeper meaning than individual consciousness, a meaning that needs to be explored in the current urban context where social bonds are fragile. The theoretical lens that enables the analysis of social relations from their symbolic, organizational, and pragmatic dimensions is the relational approach, from which the emergent effects of these bonds and their relationship to the context are revealed. The case study is Comuna 13 in Medellín, a territory marked by violence and resistance. There, the analysis examines how social organization has emerged and evolved amidst armed conflict, art as a form of re-existence, and the effects of public policy on social urbanism.

Keywords: Comuna 13, established and instituting dynamics, relational approach, social organization, social bond.

INTRODUCCIÓN

A continuación, se traza un recorrido relacional que explora cómo la organización social en la Comuna 13 se ha constituido a lo largo de las últimas cinco décadas y se analiza cómo las dinámicas instituidas e instituyentes han fortalecido o, por el contrario, amenazado el vínculo social en el territorio. Se aborda el proceso de poblamiento impulsado por la migración rural, debido a la violencia y el auge industrial, lo que llevó a la proliferación de asentamientos irregulares y a una lógica de autoconstrucción ciudadana ante la ausencia estatal. Se explora el nacimiento de la organización social comunitaria desde el convite, como una forma espontánea y solidaria de resolver necesidades básicas, hasta la evolución hacia las Juntas de Acción Comunal (JAC) y, posteriormente, la Junta Administradora Local (JAL). Este recorrido ilustra la transición del magma incandescente del poder instituyente a formas organizativas más instituidas, no exentas de tensiones. De esta manera, se

muestra cómo la llegada del conflicto armado a finales de los años ochenta, con la presencia de milicias, guerrillas y paramilitares, marcó un punto de inflexión, proscribiendo la organización social por momentos y fragmentando al mismo tiempo el vínculo comunitario y el territorio. No obstante, este período también dio origen a respuestas colectivas de resistencia a través del arte y la imaginación, destacando la cultura hip-hop y las marchas pacíficas, como mecanismos de reconfiguración del vínculo.

Igualmente se analiza el efecto de la pacificación de la Comuna 13 a través de operaciones militares como Mariscal y Orión en 2002, revelando el alto costo humano y la manipulación discursiva que acompañó la aparente calma. Se examina críticamente el modelo de urbanismo social y marketing de ciudad, implementado a partir del 2004, que buscaba una renovación urbana y la construcción de una imagen de resiliencia, pero que, en muchos casos, invisibilizó problemas persistentes como el desplazamiento, la precariedad y la desigualdad.

POBLAMIENTO Y NACIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LOS BARRIOS PERIFÉRICOS DE LA COMUNA 13. LA TERRITORIALIZACIÓN

El término Comuna es una referencia que alude en Colombia a una forma de división político administrativa, que agrupa barrios localizados en una misma zona. La Comuna 13-San Javier es una de las 16 que conforman la ciudad, ahora denominada Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y que, junto a los cinco corregimientos, zonas rurales o periurbanas, componen la jurisdicción que, en su conjunto, define las 21 unidades territoriales constitutivas del distrito. El área de la Comuna 13 se extiende a 74,2 km², que representa el 6,2% del total del área urbana de Medellín. Esta zona se encuentra ubicada en el centro occidente de la ciudad, Los barrios de la Comuna 13, en su mayoría, responden a criterios y características establecidas por el Consejo Nacional de Política Económica y Social para los asentamientos informales (CONPES 3305), que resalta el patrón de desequilibrio, visión de pequeña escala, expansión irracional y la precariedad de los asentamientos.

Desde 1869 se comienza a denominar La América, a un pequeño caserío que hasta ese momento se llamaba La Granja, pero que pasa a ser un corregimiento conformado por cuatro veredas, que para ese entonces eran: San Javier, La Puerta, La Loma y El Corazón. Esta última daría origen a “los barrios Belencito, Betania y El Salado, los cuales fueron registrados en el año 1910 como invasiones tempranas” (Alcaldía de Medellín, 2015, p. 30). Precisamente es en uno de estos barrios,

Belencito, donde se asentó en 1938 la comunidad religiosa de la Madre Laura, la cual lideró un proceso de loteo para brindar solución de vivienda a algunas familias que ya ocupaban sectores de esa zona de manera irregular.

Este fue uno de los hitos de poblamiento más importantes para la consolidación del barrio Belencito y la comuna, que se sumaría a otros, como el registrado en 1946, cuando la Cooperativa de Vivienda de Medellín, “transforma la finca del señor Pepe Ángel ubicada en el Barrio San Javier, en sector residencial” (Alcaldía de Medellín, 2015, p. 30). Esos esfuerzos iniciales por propiciar un orden en la formación barrial se fueron diluyendo, especialmente a partir de 1950 con la venta ilegal de lotes que alimenta significativa y sostenidamente la llegada de personas y nuevos asentamientos. Es así como, los barrios Santa Rosa de Lima, La Pradera y Los Alcázares fueron producto de la migración campesina generada por la violencia partidista que, por ese entonces, azotaba al país, pero, también del auge industrial de la ciudad a mediados del siglo XX Delgado (1997).

Para la década de los sesenta, continúa la proliferación de asentamientos irregulares sin control institucional, aunque algunos, como la ocupación La Colina, en Belencito, fueron legalizados con el tiempo. Entre los años 1978 y 1980, “las laderas occidentales de los barrios Veinte de Julio y Antonio Nariño recibieron un alto número de pobladores. Luego, bajo la práctica de invasión, piratería y toma espontánea de tierras, se formaron asentamientos en los sectores actualmente denominados “Las Independencias I, II, III y Nuevos Conquistadores” (Alcaldía de Medellín, 2015, p. 31). De esta forma, entre 1979 y 1980, “destechados urbanos de la ciudad de Medellín, que buscaban acceder a una vivienda propia, participaron en las invasiones que dieron pie a la conformación de los asentamientos humanos densamente poblados y que luego se consolidaron como los barrios” (CNRR, 2011, p. 55). Es decir, que la configuración y consolidación de algunos barrios ha sido un proceso gradual y, por tal motivo, no se dispone de fechas exactas de fundación para muchos de ellos, mientras que los que fueron planeados por el Estado cuentan, en su mayoría, con fechas de fundación. Estos últimos, ubicados en la parte baja de la comuna, pues en las laderas, tanto la legalización y establecimiento de límites político-administrativos, como la configuración física y social, han sido resultado de un relacionamiento y apropiación previo por parte de los pobladores, evidenciando transiciones de procesos instituyentes que terminan siendo instituidos.

El poblamiento se dio primero “en la parte norte de las laderas oriental y occidental y paulatinamente se fue generando un proceso de ocupación del espacio de las partes altas de las

zonas centro occidental, sur occidental y centro oriental” (Zapata, 2017, p. 9). En general, quienes llegaron allí eran destechados de otras partes de la Comuna y de la ciudad y desplazados de los departamentos de Antioquia y Chocó” (CNRR, 2011, p. 24). El fenómeno migratorio y el carácter receptor de la comuna van a continuar con fuerza durante los años noventa con personas y familias provenientes, además del Chocó, de la región de Urabá, también huyendo del conflicto armado. También durante los noventa, se intenta desde la institucionalidad atender este creciente problema. Es cuando la Consejería Presidencial para Medellín impulsa el Proyecto Integral de Mejoramiento de Barrios Subnormales (PRIMED), programa de cooperación internacional. Este programa focalizó la intervención en infraestructura física barrial, como vías y aceras principalmente. No obstante, para ese momento la población de la Comuna 13 ya había alcanzado el tamaño de una ciudad intermedia y las acciones resultan insuficientes para frenar el crecimiento territorial sin control.

Una constante en la población migrante que por décadas ha arribado y sigue llegando a la comuna, es el temor y la incertidumbre, es saber qué dejan y de dónde salen, pero no saber a dónde llegarán, ni dónde ubicarse. El Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación -CNRR (2011), recoge estos sentimientos cuando relata el estado de frustración: “¿A qué palo me arrimo...? ¿Para dónde cogemos...? ¿Ahora qué hacer...? fueron interrogantes de incertidumbre de centenas de personas que llegaron a lo que es hoy la Comuna 13 – San Javier de Medellín” (CNRR, 2011, p. 56). Esta ocupación, también fue posible gracias a la autoconstrucción, con la consecuente precariedad de técnicas, material y ordenamiento del espacio, pero, adicionalmente, estas construcciones se efectuaban en terrenos catalogados de alto riesgo no recuperable, factor que representaba un obstáculo para la inversión institucional.

La ocupación de la comuna, desde esta perspectiva, ha tenido su propia lógica, como se mencionaba en una tertulia con pobladores en 2015: “Como se hizo en sectores subnormales, la lógica no la puso el Estado, sino los ciudadanos” (Alcaldía de Medellín, 2015, p. 57). Lógica práctica, instituyente, promovida por organizaciones que hacían frente a las contingencias que se les iban presentando.

Partiendo de la idea de que la configuración organizacional es contingente, es decir, motivada por las circunstancias y el contexto, pero también instituyente, en virtud de que incorpora emergencia, nuevos elementos y formas de hacer, “aparece el convite en el panorama como una expresión práctica de resolución solidaria de necesidades básicas. En esta reunión de vecinos y amigos se realizan

trabajos en común y se ofrece comida y bebida” (Alcaldía de Medellín, 2013, p. 26). Esta forma organizativa tiene lugar especialmente los fines de semana e involucra mujeres, niños y hombres.

Una vez asegurado el terreno, bien fuera por ocupación o compraventa, se montaba el rancho con los elementos que se pudiera y los convites iban orientados a mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias, pudiendo así, por ejemplo, “fundar sus casas seguras: pasar del fieltro y el cartón al bahareque y/o al ladrillo, así como definir las vías de acceso” (Alcaldía de Medellín, 2013, p. 26). Cuando se había asegurado el terreno y la vivienda, lo siguiente era garantizar el acceso al agua, que también agrupaba voluntades. Cubiertas estas tres necesidades (terreno, vivienda y agua), las acciones colectivas se enfocaban en “construir senderos, acceder a la energía eléctrica, secar humedales, habilitar espacios de esparcimiento, solucionar lo del colegio para los niños, gestionar la atención de salud. Todas estas necesidades, comunes a cualquier familia, se tornaban rápidamente en preocupación colectiva” (Alcaldía de Medellín, 2013, p. 14). Según CNRR (2011), para la Comuna 13, “las primeras expresiones organizativas se remontan a finales de los años setenta con las invasiones de terrenos y el proceso fundacional de asentamientos urbanos de parte de destechados que reclamaban su derecho a la vivienda y a la ciudad” (CNRR, 2011, p. 205).

Este periodo de configuración de un vínculo social, era al tiempo un período de configuración territorial, más precisamente de territorialización. Para la realización del convite, las personas se distribuían actividades de gestión ante otras instancias y actores, como el municipio o políticos, en especial para la obtención de recursos para la compra de materiales, aunque en muchos casos ellos mismos extraían el material desde quebradas como la Pelahueso. El convite en sí, es decir, la reunión de personas para llevar a cabo acciones colectivas, representaba una forma de organización, pero todas las actividades previas para la consecución de recursos, en especial cuando el alcance y costos de las obras comunitarias así lo demandaban, también implicaban distintas formas organizativas que contribuían a la consolidación y fortalecimiento de lazos de solidaridad. Por ejemplo, concursos de pesebres o reinados de belleza, donde, según la Alcaldía de Medellín (2013), no ganaba la más bonita, sino la que lograra recaudar la mayor cantidad de fondos. De esta manera, el convite cumplía mínimamente un doble propósito que fortalecía el vínculo social, como es, por una parte, generar cohesión en torno a la solución de necesidades o problemáticas específicas comunes y, por otro, ser espacio de acogida y socialización para los recién llegados, como espacio de proyección. Los recién llegados comprendían en estos espacios cómo se construía comunidad, barrio, territorio.

Adicionalmente, los partidos de fútbol, las fiestas de la virgen, la venta de empanadas, entre otras celebraciones y espacios de encuentro, terminaban por propiciar en los habitantes ese sentido de comunidad y de unidad que se iba forjando día a día, en un esquema de dones y contradones, mediados por el tiempo.

El convite fue así una respuesta, una configuración organizacional espontánea e instituyente, que permitió solventar las dificultades de muchas familias que poblaron la comuna durante la segunda mitad del siglo XX. No se trataba de una forma de organización vertical, rígida, estable o instituida, sino que estaba compuesta por vínculos frágiles que se hacían y deshacían, en reconfiguración permanente todo el tiempo, aunque precisamente en ello radicaba su poder instituyente. No obstante, por el mismo crecimiento territorial, el dinamismo e institucionalización de varios vínculos, con el tiempo el convite fue perdiendo su poder y se fue quedando corto para solventar problemáticas que ganaban envergadura a la par del crecimiento poblacional.

Fue así como llega el momento de las Juntas de Acción Comunal-JAC, que si bien ya existían desde la Ley 19 de 1958 y estaban establecidas en otras partes de la comuna, para el caso de los barrios que apenas se estaban conformando en las partes altas, se trataba de espacios inéditos. Como toda transición, no fue un proceso sencillo, libre de tensiones, ni mucho menos simultáneo o uniforme en todos los barrios de la comuna. Hoy en día, las JAC son vistas como fiel representación de las formas de organización instituida y, como lo recuerda Borja et al. (2017), “la participación política instituida es una tendencia homogenizante y regulada” (Borja et al, 2017, p. 10). No obstante, el enfoque relacional invita a observar que, antes de convertirse en magma solidificado, muchas de las JAC de la comuna partieron del magma incandescente del poder instituyente, es decir, que la transición de la forma organizativa del convite a la JAC, permite atestiguar el justo momento en que se estaban configurando, cuando esas JAC de esos barrios en formación aún se encontraban en estadios instituyentes. Los esfuerzos instituyentes partían de lo instituido y viceversa. Se respondía con institución mientras se configuraba con organización, como sostiene Lewkowicz (2004, p.181).

En aquel contexto de diversidad organizacional y crecimiento poblacional, se hace cada vez más necesaria una instancia organizativa de escala comunal y es así como a mediados de los años noventa, irrumpe la figura de la Junta Administradora Local (JAL), instancia creada por el acto legislativo número uno de 1968, pero que a partir de la Constitución de 1991 las ubica como parte de la estructura de la Rama Ejecutiva del Estado y el Congreso de la República las reglamenta a través

de la Ley 136 de 1994. De esta manera, los noventa fueron una época en la que distintas organizaciones de la comuna generaron centralidades simbólicas y de acción que, a su vez, promovieron otras organizaciones y agrupamientos en torno a intereses comunes. Es decir, en coexistencia y cohabitación, pero también en diferenciación. Esto sería así hasta comienzos de la década del 2000, cuando, nuevamente, se estremecen los cimientos de los vínculos simbólicos, organizacionales y prácticos que se venían configurando, por la escalada de la violencia y, unos pocos años más tarde, por la institución del programa de Planeación Local y Presupuesto Participativo. El cual tuvo un doble efecto, como fue, por un lado, alentar la imaginación y el soñarse un futuro, a través de los ejercicios de planeación local, pero, por otro lado, el debilitar el vínculo, especialmente de algunos de los lazos que las organizaciones habían logrado construir en los últimos años. El presupuesto participativo propició una fragmentación no sólo entre las diversas organizaciones, sino, incluso, al interior de estas mismas y sus dinámicas internas. En este punto, los intereses económicos o particulares empezaron a reemplazar los intereses colectivos y el programa, que era institucional, terminó por permear el poder instituyente de varias organizaciones.

LLEGADA DEL CONFLICTO ARMADO A LA COMUNA 13: MILICIAS DE IZQUIERDA, NARCOTRÁFICO Y EL DESEMBARCO PARAMILITAR . LA DES-TERRITORIALIZACIÓN

La relevancia analítica del conflicto armado en Colombia, con foco en la Comuna 13, se debe a que este fue un punto de inflexión en la configuración del vínculo social, tanto por la violencia desatada durante el fragor del conflicto, como por sus efectos y heridas duraderas en los períodos posteriores, que aunque se analizarán a continuación, se pueden resumir en una ruptura del vínculo social.

La localización de la Comuna 13 le ha valido en las últimas décadas más traumatismos y desventajas que oportunidades, sobre todo para los barrios no planeados. Ello dado que, sumado al aislamiento físico-espacial en las décadas de los setenta, ochenta y noventa, a su agreste topografía, así como a la falta de infraestructura y vías de acceso, que han marginado a estas poblaciones, está también su cercanía de la carretera al Mar, por donde históricamente se han movilizado altos flujos de todo tipo de economías lícitas e ilícitas. Además del departamento del Chocó, es igualmente la conexión al occidente del departamento de Antioquia y a zonas como el Urabá, que han sido

fuertemente azotadas por el conflicto armado y cuya conexión ha servido a muchos desplazados de esta región para llegar a la Comuna 13.

Este conjunto de circunstancias, sumado a las condiciones de pobreza, exclusión y abandono estatal, favoreció que a finales de la década de los ochenta y comienzos de los noventa se incrementara la llegada de actores armados a la comuna. “Las milicias fueron las primeras en hacerse presentes y, posteriormente, las guerrillas y los paramilitares; en cada caso impusieron un régimen de orden y autoridad que consideraban inexistente” (CNRR, 2011, p. 51). Se trataba de las Milicias América Libre, las Milicias Populares de Occidente y los Comandos Armados del Pueblo (CAP), estos últimos eran los más célebres y ejercían control sobre el barrio El Salado en los años noventa, donde llegaban prometiendo seguridad y limpieza social, reforzando el mensaje con masacres como la ocurrida en el barrio El Salado el 13 de febrero de 1992, cuando asesinaron a seis personas y les dejaron letreros de advertencia colgados.

En buena medida, estas organizaciones reemplazaban el rol del Estado, por ejemplo, con la repartición de terrenos, entrega de alimentos, celebración de festividades o solución de litigios cotidianos entre pobladores. De hecho, en un comienzo sus acciones no eran mal percibidas por habitantes, que veían en estas organizaciones la garantía del dispositivo securitario. “Los CAP también establecieron controles para el ingreso a la comuna. Desde esta época los grupos armados controlaban las relaciones que establecían, en especial, los líderes, el uso de los espacios públicos” (CNRR, 2011, p. 67). Milicias de las FARC y del ELN también empezaban a tener presencia allí. La convergencia de “Fuerza Pública, la presencia de milicias y la guerra en la comuna, justificó la imagen de sus habitantes como guerrilleros, milicianos o colaboradores. Aunque en principio los afectados fueron los jóvenes, este estigma se generalizó a toda la población” (CNRR, 2011, p. 68). Sobre dicho estigma y discurso, se sustentó la narrativa que justificaría años más tarde la intervención militar directa.

El auge de las milicias en Medellín llevó a sus líderes y al gobierno nacional, a través de la Consejería Presidencial para Medellín y el Valle de Aburrá, a llevar a cabo un proceso de diálogo y desmovilización, que terminó el 26 de mayo de 1994 con la desmovilización de 650 milicianos de la ciudad. Pero, nuevamente, la fortuna no favoreció a la Comuna 13, ya que justamente las milicias que operaban allí no se acogieron a la desmovilización y lo que sucede es una reconfiguración de estas organizaciones. De tal forma que, “llegaron a establecer una hegemonía casi absoluta sobre la

Comuna 13 hasta finales de los años noventa” (CNRR, 2011, p. 61). Con la aparición de los grupos armados, comienzan a presentarse otros fenómenos que más tarde se convertirían en verdaderas problemáticas sociales de alcance regional y nacional, como es el reclutamiento forzado, que además de representar una grave violación a los derechos humanos, es aún más grave cuando el blanco preferido son menores de edad.

Es a partir del año 1997 cuando la situación de orden público en la Comuna 13 adquiere nuevos matices, pues ante el avance del dominio paramilitar en buena parte del país, el jefe paramilitar Carlos Castaño posa su mirada en el contexto urbano, concretamente en las milicias. Es así como durante este año empiezan a presentarse las primeras incursiones paramilitares en la comuna dirigidas por “el Bloque Metro, el Bloque Cacique Nutibara y el Frente José Luis Zuluaga de las Autodefensas Unidas del Magdalena Medio. De acuerdo con algunos testimonios, empezaron a meterse las autodefensas en Belén Aguas Frías para abajo” (CNRR, 2011, p. 71). Mientras esto sucedía en la comuna, distintas organizaciones, actores, habitantes y defensores de derechos humanos comenzaban a alertar sobre una inminente crisis humanitaria, pero el país tenía toda su atención en los diálogos de paz que comenzaba el presidente de la república Andrés Pastrana con la guerrilla de las FARC en el municipio del Caguán, los cuales concluyeron en el 2002, sin acuerdo, con un gobierno en niveles históricos de impopularidad y una guerrilla fortalecida, que también se iba posicionando en la Comuna 13 fruto de ese poder adquirido durante las negociaciones.

Según datos de la CNRR (2011), “el incremento del paramilitarismo en casi todas las regiones del país, (...) y el anuncio del Mono Jojoy, el 24 de julio de 2002 sobre la intención de las FARC de urbanizar la guerra profundizan el giro hacia una confrontación en las ciudades” (CNRR, 2011, p. 73).

Pero no era solamente el vínculo social a nivel comunitario el que resultaba amenazado, también las relaciones y dinámicas familiares, donde empezaba también a reinar la desconfianza por las relaciones que establecían sus miembros. Fue así como el siglo arrancó en la Comuna 13 con un enfrentamiento abierto y directo, entre unas milicias o guerrillas que trataban de conservar la única comuna de la ciudad donde habían logrado imponerse y, los paramilitares, que buscaban propinar un golpe estratégico a la insurgencia. Para el gobierno derechista del recientemente posesionado Álvaro Uribe Vélez, en el año 2002, quien se hizo elegir sobre las cenizas del fallido proceso de diálogo con las FARC y la impopularidad del anterior mandatario, el conflicto en la comuna era una oportunidad

para poner en práctica su política de “seguridad democrática”, focalizada en la guerrilla, además, en su ciudad natal, que había contribuido significativamente en su elección como presidente.

Los líderes o figuras más representativas de las organizaciones se convirtieron en objetivo de estos grupos armados. Los asesinatos se cuentan por docenas. Por ejemplo, en el cambio de milenio, “se dio una escalada de asesinatos que cobraron la vida de 16 líderes comunales entre 2000 y 2004. Hacia 2003, Nazareno Pérez, que era el presidente de ASOCOMUNAL decía: No nos visibilicemos, donde llegemos no nos presentemos como ASOCOMUNAL” (Alcaldía de Medellín, 2015, p. 69). Otro caso fue el asesinato en 2004 de Teresa Yarce, de la Asociación de Mujeres Las Independencias (AMI), y que también hacía parte de la JAC Las Independencias III. Como se mencionó, las organizaciones sociales y las JAC guardaban sintonía y tejían vínculos estrechos, por lo que el asesinato de Teresa en una cancha de la comuna generó miedo y desazón entre la comunidad y las organizaciones que representaba, propiciando, además de las desarticulaciones y rupturas de los vínculos, el desplazamiento de otras personas. En muchos casos, los padres, preocupados por la vida e integridad de sus hijos, les prohíben hacer parte de alguna organización, grupo juvenil o colectivo social, por temor a represalias de los grupos armados. Es la época en la que comienzan a proliferar las fronteras invisibles, propiciando segregación físico-espacial.

Las respuestas de los jóvenes a las restricciones organizativas y espaciales impuestas por los grupos armados, fueron diversas, desde las más pasivas hasta las más activas. Hubo varios que se resguardaron o se alojaron en otros lugares menos peligrosos de la comuna o la ciudad, pero también hubo un número importante de jóvenes que, ante la impotencia y vulnerabilidad percibidas, asumieron una actitud, aunque pacífica, abiertamente desafiante, reivindicando el derecho a la reunión y a la libre circulación, mientras que otros actores y organizaciones trataron de adaptarse a las nuevas circunstancias. El coste en vidas fue alto, pero sentaron las bases y abrieron los espacios para lo que sería el renacimiento de la organización social en la comuna. Aunque antes de esto, el vínculo social y organizacional estaba prácticamente proscrito.

Durante el 2001 y 2003, la Comuna 13 experimentó una convergencia de circunstancias que propiciaron una crisis urbana sin precedentes, enfrentando a milicias, guerrilla, paramilitares, fuerza pública y delincuencia común, mientras la población civil se encontraba desamparada por parte del Estado. Es así como en el año 2002 se desata una confrontación urbana. “Más de un año de enfrentamientos armados permanentes entre los grupos ilegales y la fuerza pública, hicieron de la

Comuna 13 – San Javier un campo de batalla, donde se violaron a gran escala los derechos humanos” (Alcaldía de Medellín, 2010, p. 13). A través de una sucesión de operaciones militares, las fuerzas armadas se asociaron con las facciones paramilitares para perseguir, expulsar o asesinar a las milicias y a cualquiera que mantuviera la más mínima simpatía con estas. Las primeras seis operaciones fueron de baja intensidad y permitieron a la fuerza pública recopilar información de inteligencia, pero llegaría la primera de dos grandes operaciones. El 21 de mayo a las 3 de la mañana de 2002, tanques del Ejército colombiano “destruyeron un transformador de energía para cortar el suministro en la parte alta de los barrios 20 de Julio, El Salado, Las Independencias y Nuevos Conquistadores (...) Se iniciaba así un operativo militar denominado Operación Mariscal” (CINEP, 2003, p. 15), que impactaría inicialmente los sectores dos y tres de la comuna.

Esta operación pasaría a la historia por dos hechos. En primer lugar, por la crudeza y violencia de la misma, un hecho inédito hasta ese entonces y, en segundo lugar, por el uso por parte de la población civil de una imagen, como es el izar el pañuelo o prendas blancas. Sobre este símbolo, su origen y significado, existen diferentes versiones e interpretaciones, aunque la mayoría de relatos recogidos en los testimonios del informe de la CNRR (2011), indican que “Izar prendas blancas o banderitas blancas, tal como lo hicieron colectiva y espontáneamente los habitantes de la Comuna 13 para pedir cese al fuego, con el objeto de atender a los heridos y detener la acción” (CNRR, 2011, p. 25), parece ser la versión más creíble, pues, en su momento, los paramilitares aducían que dicha acción era simplemente una táctica militar para favorecer y dar respiro a las milicias. El punto es que, el tema de las banderas blancas adquirió un significado para los habitantes de estos barrios castigados por el conflicto armado.

El siete de agosto de 2002, se posesiona el presidente de derecha Álvaro Uribe Vélez y, quien fuera el alcalde de la ciudad de Medellín para ese entonces, Luis Pérez Gutiérrez, le solicita mayor intervención de la fuerza pública en la Comuna 13, para evitar que el conflicto se extienda a otras comunas de la ciudad. La petición encuentra eco en el presidente y envía al comandante del ejército con cuatrocientos cincuenta soldados especializados en operaciones urbanas. De esta manera, el 16 de octubre de 2002 comienza oficialmente la Operación Orión, la cual se extendería por un mes y es catalogada como la operación militar más grande llevada a cabo en un contexto urbano en Colombia. Se trató de una operación militar conjunta entre Ejército Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad-DAS, Fiscalía, Policía y organismos de inteligencia que sumaban más de 1.500 efectivos.

Adicionalmente, la operación contó con un despliegue de armamento que incluía tanques blindados y helicópteros artillados. La fuerza de intervención se complementaba con un grupo de informantes encapuchados compuesto por paramilitares, sobre todo, antiguos milicianos de la comuna que habían cambiado de bando. “De acuerdo con declaraciones de Don Berna, en esta operación hubo participación de paramilitares que habían realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a las autoridades en labores de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla” (CNRR, 2011, p. 80). De igual manera, se mencionaba que varias de las personas detenidas en el marco de las operaciones eran en realidad líderes sociales, que representan a población desplazada del Movimiento Social de Desplazados de Antioquia (MOSDA) y fueron procesados por los delitos de rebelión, homicidio y desplazamiento forzado. El fundamento para estas detenciones es el dicho de testigos pagados por la Fuerza Pública” (CINEP, 2003, p. 31).

La Operación Orión fue la última de aquella campaña militar del 2002 y culminó con la expulsión definitiva de las milicias y guerrillas de la Comuna 13. Fue además asumida como una victoria para las fuerzas militares, el gobierno del presidente Álvaro Uribe, el alcalde Luis Pérez y los paramilitares. Pero esto no representó el final de la violencia, “ni del poder ejercido por actores ilegales en la Comuna 13. Los espacios dejados por la guerrilla fueron copados por el Bloque Cacique Nutibara, que continuó incurriendo en acciones violatorias de derechos humanos hasta el momento de su desmovilización” (CNRR, 2011, p. 83), el 25 de noviembre de 2003.

LA RECONFIGURACIÓN DEL VÍNCULO. LA RE-TERRITORIALIZACIÓN

Como afirma Moreno (2022), “sabemos de la importancia de los conceptos de territorialización y desterritorialización en la obra de Deleuze y Guattari (...) insisten en poner en relación la territorialización con circuitos que persiguen estabilidad. La desterritorialización, sin embargo, corresponde a procesos inestables” (Moreno, 2022, p. 41). Hoy sabemos, sin embargo, que en la práctica, muchos procesos de re-territorialización, aunque estabilizadores, en apariencia, pueden esconder inestabilidad y fragmentación de otros sectores de la población. Resulta esencial, por lo tanto, el movimiento de este ciclo a partir de una concepción relacional, para entender los procesos de re-configuración que ha experimentado la Comuna 13, sobre todo luego de su pacificación, pues es por esta época donde más se tensa la relación entre el territorio vivido y el institucionalizado,

incluso, entre estos y el estratégico, si se tiene en cuenta lo expresado por Boudreau (2004, p. 111). Para este autor el territorio estratégico es la respuesta de las organizaciones al territorio institucionalizado, a partir de un territorio vivido, que sería su condición contingente.

En este movimiento es preciso esclarecer que la pacificación fue parcial y, en gran medida, operó más a nivel mental y discursivo que en la realidad, producto de distintas manipulaciones, según abundante evidencia empírica, relatos e, incluso, datos oficiales, tanto de la época como posteriores. Es así como en el año 2004 asume la alcaldía de Medellín Sergio Fajardo Valderrama, con un enfoque de ciudad completamente diferente y renovado, basado más en el pago a la deuda social con los barrios populares de Medellín. Este hereda, además, una ciudad y una Comuna 13 pacificadas, al menos desde el discurso. Es aquí donde inicia un nuevo ciclo en la Comuna 13, a partir de una estrategia denominada Urbanismo Social. Las intervenciones que tuvieron lugar en el marco del urbanismo social, no obstante, no fueron las primeras intervenciones urbanas en barrios populares de la comuna.

En este nuevo enfoque de ciudad, la movilidad asume el rol conector de la trama urbana. Especialmente, esta va a imprimir una lógica a estas intervenciones que, con el tiempo, serán también fuente de tensiones para el vínculo. Por ejemplo, entre movilidad de capital y movilidad humana. Pero, adicional a la prioridad dada a la movilidad, se incorpora el concepto de urbanismo social como apuesta para la construcción de ciudad y horizonte de los PUI. La renovación urbana, por lo tanto, definió la primera década del nuevo milenio en Medellín, contribuyendo al cambio de percepción entre habitantes y visitantes de la ciudad en general y la comuna en particular: Atrajo mayor inversión y empezó a labrar el mito o la imagen resiliente de la Comuna 13, que había logrado reponerse de aquellos oscuros días de la violencia. “A pesar de esto, el panorama de violencias y el desplazamiento forzado (...) no cesa” (CNRR, 2011, p. 58), pero queda oculto bajo este modelo esteticista de ciudad. Durante la década del 2000, el presupuesto público invertido en paisajismo y urbanismo alcanzó en Medellín valores inéditos y antes de concluir, el marketing de ciudad que había acompañado los esfuerzos de transformación a través del urbanismo social empezaba a dar los primeros réditos, incluso, empezaba a aflorar un incipiente turismo y, desde la academia, Medellín se empezaba a perfilar como un laboratorio para el estudio de diversos fenómenos sociales y urbanos.

Los efectos inmediatos de las intervenciones públicas emprendidas desde 2003 y potenciadas con la entrada del PUI en 2007, tuvieron impactos inmediatos respecto a percepción de mejoría en la

seguridad y de otras condiciones asociadas a la calidad de vida. No obstante, al revisar el histórico del Índice Multidimensional de Calidad de Vida, se evidencia que, al menos en el rango de 2011 a 2018, las cifras permanecen casi que inalteradas y en una baja calificación, cuando se compara con el comportamiento del indicador en otras comunas de la ciudad, lo cual da cuenta de problemáticas endémicas, que terminan instaurando condiciones de precariedad y contrastan con algunos discursos oficiales. Otros dos efectos de las intervenciones son el turismo y la gentrificación, que igualmente tienen una incidencia directa en el vínculo social. ¿Por qué abordar los procesos de turismo y gentrificación que se han desarrollado en la comuna en los últimos años, si estos no son representativos de toda su extensión ni de todos los barrios? En primer término, su relevancia analítica radica en entender cómo estos procesos afectan el vínculo local presente y lo reconfiguran. Segundo, es importante entender qué tipo de nuevos vínculos se crean y a qué intereses responden, pero también interesa comprender cómo se articulan estos procesos en una secuencia histórica precedida por una inclemente violencia junto con los discursos que acompañan la reconfiguración territorial. Si bien es cierto que no todos los sectores de la comuna experimentan esta situación, el impacto generado, las tendencias crecientes de ese nicho y, ante todo, el deseo de otros sectores de atraer turistas demanda un análisis detallado de este fenómeno, donde el despojo por desposesión y la reelaboración de los discursos de memoria se cruzan con el mercado y el capital. Sequera sostiene que la renovación de las ciudades suele acompañarse o perseguir la autenticidad y la singularidad. Para ello, “actividades relacionadas con la cultura, el conocimiento y los saberes técnicos refuerzan la idea de la necesidad de nodos estratégicos espaciales y la formalización de políticas de atracción a través de la revitalización de los centros urbanos, con objeto de poner en venta la cultura y las tradiciones de un determinado lugar (Sequera, 2020, p. 45). Esto parece coincidir con la innovación que evocan las escaleras eléctricas en la Comuna 13 y la manera en que se complementaron con un Graffitour y otros elementos, que buscan representar aspectos históricos, sociales y culturales de la comuna, desde una visión y una lógica, que destaca unos aspectos e invisibiliza otros.

Expresiones artísticas que eran vistas con desconfianza tan sólo unos años antes por los grupos que buscaban control territorial, ahora eran promocionadas y apropiadas por una institucionalidad y un mercado que, en su afán, arrebatan a las organizaciones el valor de sus imágenes. Ejemplos abundan, como la apropiación de la expresión del graffiti a través del denominado Graffitour que no se compone de graffitis sino de murales. En otras palabras, el Graffitour es un

dispositivo antigraffiti, aunque en él participen organizaciones y colectivos tradicionales de graffiti y aunque pueda ser un espacio de proyección del arte callejero. No obstante, las imágenes distribuidas en el recorrido están fuertemente condicionadas y, en ocasiones, mercantilizadas, no tienen la carga simbólica de denuncia que tiene el graffiti, los murales no son graffitis.

Si consideramos, por lo tanto, las tres dimensiones del vínculo social que plantea Donati (2006), a saber: la referencial, la organizativa y la pragmática, este tipo de estrategias, como la del Graffitour, termina incidiendo en la apropiación simbólica que las organizaciones hacen de sus mismos referentes, en las reinterpretaciones de la memoria y en la búsqueda de intereses diversos, pero no contradictorios, como dinero y reconocimiento. El mercado vio allí, en la mezcla de discursos resilientes y en la atracción que generaba conocer lugares que otrora habían estado prohibidos para gran parte de la población, una oportunidad de expansión, donde no pocos habitantes se han sumado, buscando mejorar sus condiciones de vida. Pero, la instrumentalización no sólo se da con el sentido que se le quiere dar a la transformación de la comuna por la vía de la innovación o del uso de nuevas expresiones artísticas y culturales, sino con todo aquello que pueda servir a la causa de producir espacios cargados de estímulos.

Es en este nuevo escenario, pocos años después de la pacificación, renovación urbana y primeras campañas de marketing de ciudad, que se va desarrollando un proceso de turistificación y se intensifica la gentrificación en la comuna. Aunque no se trata solo de un asunto local, ya que durante las dos últimas décadas, el turismo ha empezado a ocupar un renglón prioritario en las economías, pero también en las agendas regulatorias del espacio en diversas latitudes del planeta. “Esto ha hecho que el turismo urbano se haya convertido más que nunca en un elemento central de la transformación espacial, económica, social y cultural de los territorios metropolitanos de todo el mundo” (Sequera, 2020, p. 100), al tiempo que surgen tensiones, entre otras, en materia de convivencia. Formas de re-territorialización y re-configuración del vínculo.

Es así como parte de esa euforia inicial del turismo urbano se ha ido convirtiendo en fuente de preocupación, por lo que hablar de turistificación se ha convertido más en una estrategia de política urbana y de control territorial que en una práctica cultural, debido a que el turismo abre nuevos espacios y relaciones conflictuosas, entre habitantes, habitantes-turistas, habitantes-agencias, turísticas y habitantes-gobierno. Según Fratucci (2008), la instalación de dicha actividad genera la turistificación de espacios, que designa procesos de apropiación de fracciones de espacio por agentes

de turismo. En tal proceso se advierte el espacio del turismo —aquel de la producción y del trabajo involucrado con las prácticas de turismo— y el espacio del turista —aquel del ocio y disfrute del tiempo libre—. Ante estas nuevas contingencias, parte de la comunidad ha comenzado a organizarse, como lo hicieron en el momento del poblamiento y la territorialización o cuando hicieron frente a la amenaza de des-territorialización, pero en esta ocasión para hacer frente a los efectos nocivos del turismo y la gentrificación.

CONCLUSIONES

La investigación permitió comprobar que, si las formas o lógicas instituidas del poder, la guerra o el mercado tienen cierta inercia, la fuerza instituyente también y, al igual que la vida, siempre se trata de abrir espacio entre las brechas del sistema por medio de organización, que permite la reconfiguración del vínculo. Igualmente, se ha logrado comprender mejor la noción de un territorio vivido y en constante transformación, que contrasta y negocia con el estático territorio institucionalizado a través de territorios estratégicos.

Este proceso de configuración (territorialización) o re-configuración (re-territorialización), es en sí un resultado emergente de la relación, donde intervienen elementos funcionales, como aquellos que aseguran la habitabilidad y sostenibilidad, y elementos simbólicos no funcionales, como los que están más cerca de los tonos y los afectos. Se podría incluso explicar parte del proceso de gentrificación como una paulatina preeminencia del factor funcional en detrimento de los referentes simbólicos y afectivos del vínculo, aunque se haga en ocasiones una apropiación funcional de dichos referentes, como en el caso del turismo, pero también para el desarrollo de actividades o programas sociales. Es, por lo tanto, en medio de dinámicas instituidas e instituyentes que se moldea el territorio y el vínculo.

Las contribuciones de esta investigación residen en enriquecer la teoría del vínculo social y el territorio desde una perspectiva integral y dialógica, ofreciendo aportes valiosos para la comprensión de las sociedades urbanas contemporáneas y las complejas interacciones entre lo social, lo político, lo imaginario y el espacio habitado. Se ha demostrado que, a pesar de las fuerzas que buscan fragmentarlo y silenciarlo, el vínculo social es una realidad dinámica, constantemente reconfigurada por la organización social, la imaginación, la institución y la acción colectiva.

REFERENCIAS

Alcaldía de Medellín. (2010) Plan de Desarrollo Local Comuna 13 – San Javier 2010-2020, Sembrando para el futuro y el desarrollo integral.

Alcaldía de Medellín. (2013) Tejiendo memorias. Recuperación de la memoria cultural e histórica de la Comuna 13, San Javier. Medellín.

Alcaldía de Medellín. (2015) Recuperación de la memoria de la movilización y la participación social en la Comuna 13 - San Javier de Medellín. Ed. Alcaldía de Medellín.

Borja, Eulalia. Barrera, Daniela. Insuasty, Alfonso. (2017) Participación política ¿instituida o instituyente? elementos para la reflexión. DOI: 10.24142/raju.v12n24a12.

Bourdieu, Pierre. (2004). Raisons pratiques. Sur la théorie de l'action. Éditions du Seuil, Paris.

CINEP y Justicia y Paz. (2003) Comuna 13, la otra versión, Contribuidores, Banco de Datos de Violencia Política, Centro de Investigación y Educación Popular, Conferencia de Religiosos de Colombia. Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz, Números 1-3, Editor Banco de Datos de Violencia Política ; CINEP& Justicia y Paz, Colombia.

Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (2011) La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13. Informe del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Ediciones Semana. México.

Delgado, Manuel. (1997) Ciudad líquida, ciudad interrumpida. Apuntes para el seminario en la Biblioteca Pública Piloto, organizada por el Posgrado de Estética de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Medellín, 4-6 de agosto de 1997.

Donati, Pierpaolo. (2006) Repensar la sociedad : el enfoque relacional. E. EIUNSA. Madrid.

Fratucci, Aguinaldo (2011) Proceso de formación de una red regional. Región turística de las Agulhas Negras – RJ – Brasil. Documentos Especiales. Estudios y Perspectivas en Turismo. Volumen 20 (2011) pp. 1483 – 1496. Brasil.

Lewkowicz, Ignacio. (2004) Pensar sin Estado. La subjetividad en la era de la fluidez. Ed. Paidós. Buenos Aires. Argentina.

Moreno, Javier. (2022) El hombre transparente. Cómo el “mundo real” acabó convertido en Big Data. Ediciones Akal, S.A. 2022. Madrid. España.

Sequera, Jorge. (2020) Gentrificación. Capitulo cool, turismo y control del espacio urbano. Ed. Catarata. Madrid. España.

Zapata, Diego. (2017) Urbanismo de la periferia y territorialidades de la violencia urbana Comuna 13 Medellín 2004-2015. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Arquitectura, Escuela de Planeación Urbano Regional Medellín, Colombia.